------ En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los integrantes de la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia: el Presidente, Dr. Mario Luis Vivas, y la asistencia del Sr. Ministro, Dr. Miguel Ángel Donnet para dictar sentencia en los autos caratulados: **"U., C. J. c/ P. ART SA s/ Accidente de trabajo (sistémico) (Expte. 1-Año 2016**)" (Expte. N° 24467-U2016). Según el sorteo practicado a fs. 298, corresponde el siguiente orden para la emisión de los votos: Dres. Donnet y Vivas.----------

------ Acto seguido, se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: **PRIMERA**: ¿Es procedente el Recurso de Casación? y **SEGUNDA**: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?----------

----- **A la primera cuestión el Dr. Donnet dijo**: ----------

------ **I.- ANTECEDENTES. EL RECURSO. SU TRÁMITE**.----------

------ **I.1.a.-** La sentencia definitiva de primera instancia hizo lugar a la demanda por accidente de trabajo promovida por el Sr. C. J. U.. Condenó a P. ART SA a abonarle la suma de $ 648.456 en concepto de indemnización por incapacidad parcial y permanente incluido RIPTE (Cons. III) con más intereses. Impuso las costas a la demandada y reguló honorarios (fs. 217/224).----------

------ **I.1.b.-** La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn revocó parcialmente la sentencia. Declaró inaplicable al caso la ley 26773; y en consecuencia, condenó a abonar al actor -en la forma y tiempo establecidos en la sentencia de grado- la suma de $ 272.460,51 con más los intereses establecidos en la sentencia de la instancia anterior. Mantuvo la imposición de costas y los honorarios regulados a los letrados y Cuerpo Médico Forense intervinientes en la instancia de origen; e impuso las costas de segunda instancia por su orden y reguló honorarios (fs. 249/262).----------

----- **I.1.c.-** A fs. 267/286 vta., el actor interpuso casación contra éste último

pronunciamiento con fundamento en la causal del inciso “a” del art. 291, CPCC y fue concedido por la Cámara a fs. 288/289 vta.----------

------ El casacionista estructuró su presentación en siete apartados centrales. En los cuatro primeros, puntualizó recaudos de admisibilidad: tempestividad de la interposición, domicilio, depósito (exención), tipo de recurso y antecedentes del caso (demanda, contestación de demanda, detalle de pruebas ofrecidas y producidas; y sentencias definitivas de ambas instancias) (fs. 268/276 vta.).----------

------ En el ap. V delimitó la crítica en orden a la causal casatoria introducida (fs. 277/286).----------
-

------ Entendió que la Cámara falló bajo una visión parcializada del derecho civil omitiendo aplicar los principios rectores del proteccionismo laboral y la *ratio legis* de las normas que desde el Decreto N° 1278 a la fecha han intentado mejorar la reparación sistémica que es absorbida por los altos índices inflacionarios.----------

------ Luego, individualizó y sintetizó los precedentes nacionales como provinciales en los que sustentó la causal casatoria alegada; y en especial, solicitó que se fije doctrina legal con la jurisprudencia emanada de las Salas A y B de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (SDL N° 95/13; y SIL N°147/13, respectivamente); y de la Sala B de la Cámara de Trelew (SDL N° 05/2015), y en la que se enroló la sentenciante de origen, en cuanto aplican la normativa más favorable para el trabajador; y por, ende, el aumento de las sumas fijas en función del grado de incapacidad dispuesto, eliminando topes y aumentando los valores con la aplicación del índice del RIPTE.----------

------ En los apartados siguientes expuso una conclusión y formuló petitorio de estilo (fs. 286 y vta.).----------
I.2.- Puestos los autos por este Superior Tribunal a disposición de las partes conforme lo exige el art. 296 del CPCC (fs. 293 y vta.), ninguna hizo uso de tal

facultad.----------
-

------ **I.3.-** A fs.296 y vta. emitió dictamen el Señor Procurador General. Propició rechazar la casación interpuesta en mérito a lo resuelto por este Cuerpo en SD N° 7/SRE/2016 y 1/SRE/2017 que siguió el criterio de la CSJN en el fallo *"Espósito"*.-

------ **II. ANÁLISIS**.----------

------ **A.** En orden al recurso planteado, en primer lugar procederé a analizar la casación desde una perspectiva formal: esto es, comprobar si se han observado los presupuestos exigidos para la admisibilidad del recurso.----------
-

------ El recurrente invocó la violación de la doctrina legal como fundamento de su casación (art. 291 inc. "a" del CPCC).----------
-

------ A tal fin, identificó no uno, sino varios precedentes de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y de Trelew que sostuvieron una posición opuesta a la del Tribunal apelado y satisfizo la exigencia temporal requerida por el código adjetivo.----------
-

------ **B.-** A fin de precisar el planteo del impugnante, voy a destacar aquellas cuestiones que no han sido objeto de agravio; y que, por lo tanto, llegan firmes a esta instancia: **1)** reconocimiento al Sr. C. J. U. de una incapacidad laboral parcial y permanente del 24,7 % de la TO; **2)** la indemnización de $ 272.460,51 (art. 14.2 a), ley 24557); y **3)** la aplicación de los intereses a la tasa activa del Banco Nación a partir de los 30 días corridos (Res. SRT Nº 414/99) desde la fecha del accidente -29/05/2012- , por lo que deben computarse a partir del 28/6/2012 (cfr.: fs. 223 vta./224; fs. 250, ap. 3.1., primer párrafo; fs. 255, ap. 2.1., primer párrafo; fs. 260 vta. ap. 3; y fs. 261 vta. ap. 1 de la sentencia).---------- **C.-** De modo tal, que el

asunto que se trae a esta instancia, se refiere exclusivamente a la aplicación de la ley 26773 en relación a contingencias anteriores a su entrada en vigencia, y la consecuente actualización por RIPTE.------

------ **C.1.** Sobre esa cuestión, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn sostiene en la sentencia en crisis -aplicando su propios precedentes- (SDL N° 94/13, 01/14, 10/14, 27/14, 04/15, 15/15, 29/15, 31/15, 32/15) que la ley 26773 no tiene operatividad propia y directa en las contingencias anteriores a su entrada en vigencia (BO 26/10/2012). Es decir, sentenció en pro de la inaplicabilidad RIPTE a aquellas prestaciones dinerarias que no hubieran sido satisfechas al momento de entrar en vigencia el régimen de la nueva ley (fs. 250 y ss., ap.3.31.; y fs. 255/259, aps. 2.1.A y 2.1.B.). En particular, destacó que se trata de una contingencia acaecida con anterioridad y bajo otro sistema de reparación, naciendo a partir de la primera manifestación invalidante, los derechos consagrados en la norma vigente a ese momento y no los que contempla una norma posterior, aun cuando resulte más beneficiosa.----------
-

------ **C.2.** En sentido opuesto, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Comodoro en el antecedente citado expresa: "…resultan de aplicación las mejoras a las prestaciones dinerarias dispuestas, primero por el Decreto 1694/09 y luego por la ley 26773 a un evento dañoso ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de dichas normas, pero no cancelado con antelación a esas fechas…" (voto del Dr. Alexandre). Y en igual línea "…el recurrente invoca el instituto de la irretroactividad de la ley cuando no estamos en ese campo, sino en el de aplicación inmediata de la ley… no estamos aplicando una ley nueva a una situación jurídica extinguida bajo una ley anterior, sino que claramente estamos aplicando una ley que reglamenta no solo las relaciones jurídicas futuras, sino también los efectos de una nacida con anterioridad, pero aun no cumplidos, es decir, las prestaciones no liquidadas…"(voto de la Dra. Alonso) (cfr. SDL N° 95/2013, del 12/5/2013 de la Sala A de la CACR).-
----

------ En este sentido, también se citó como precedente una sentencia interlocutoria de la Sala B de la misma Cámara (SI N° 147/13, del 30/7/2013) pero en referencia a las prestaciones dinerarias por incapacidad permanentes producidas durante la vigencia de la LRT, el Decreto 1278/00 y el Decreto 1694/09, en la que sostuvo el criterio de aplicación inmediata de la ley 26773, en cuanto la redacción del inciso 5 del art. 17 es similar al art. 16 del Decreto 1694/09. Así determinó, en el marco de la ejecución de sentencia, que las prestaciones dinerarias de la declaración de incapacidad parcial permanente con carácter definitivo que están pendientes de pago, en el caso, se le debe aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por índice RIPTE de conformidad con lo dispuesto por el art. 17, inc. 6 de la ley 26773.--------

------ Asimismo, la SDL N° 5/2015 de la Sala B de la Cámara de Trelew, precisó que el ajuste por el índice RIPTE se aplica de inmediato a aquellas contingencias producidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26733 ya que el art. 3 del Código Civil dispone que las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.----------

------ **D.-** En consecuencia, han quedado sumamente diferenciados los criterios en la materia. Mientras que la sentencia impugnada se enrola en la inaplicabilidad de la ley 26773 a las contingencias anteriores a su entrada en vigencia (BO 26/10/2012) en cuanto carece de operatividad propia y directa; las Cámaras de Apelaciones de las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew, a través, de ambas Salas, se enrolaron en la aplicación inmediata de la norma a las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad y no liquidadas a la fecha de su entrada en vigencia.--------

------ **E.-** Cabe considerar que la cuestión planteada fue abordada ya por este Cuerpo en los fallos “Egue” (STJCh, SD N° 07/SRE/2016) y “Tello” (STJCh, SD N° 01/SRE/2017), y compartida por el suscripto en SD Nros. 08/SRE/2017, 09/SRE/2017, 10/SRE/2017, 11/SRE/2017, 12/SRE/2017, 14/SRE/2017, entre otras; por lo que mi propuesta al acuerdo no ha de variar en este caso. Recuerdo que la doctrina sentada por este Tribunal se sustentó en el precedente *“Espósito”* de la CSJN.----------

------ Se dijo en la SD N° 07/SRE/2016, con un criterio que comparto que: "…si bien las cortes no emiten fallos obligatorios para el sistema de justicia, resulta preciso atender a las razones que hacen a su observación, por ejemplo: la predictibilidad, la seguridad, la economía de esfuerzos, la paz social…"----------

------ Y que "…el Máximo Tribunal ha construido el criterio que establece: "...no obstante que (la Corte) sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y que sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus sentencias (*Fallos*: 25:365; 307:1094; 315:2386, entre otros)..." (Dictamen del Procurador General en el caso CASA CASMMA SRL S/ CONCURSO PREVENTIVO s/ incidente de verificación tardía [promovido por Municipalidad de La Matanza]. [RECURSO DE HECHO] del 07 de diciembre de 2007)..."----------

------ Y además que: "...Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste, de donde deriva la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento..." (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-en CORNEJO ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO s/ ORDINARIO C. 2583. XLI. RHE 18/12/2007)..."----------

------ **F.-** Entonces, y en el mismo sentido del razonamiento expuesto, la solución del asunto se alineará a lo decidido por la Corte Nacional en el caso: "Recurso Queja Nº 1-ESPOSITO DARDO LUIS c/ PROVINCIA ART SA s/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL CNT 018036/2011/1/RH001 del 07/6/2016, *Fallos*: 339:781).-----

------ Cabe considerar que el Máximo Tribunal, expresó en el considerando 5°) "…Que en octubre de 2012 la ley 26773 introdujo nuevas modificaciones

sustanciales en el régimen de reparación de los daños derivados de los riesgos de trabajo. Entre dichas modificaciones, interesa destacar que el art. 3°[…] Por otra parte, el art. 8° estableció, para el futuro, que "…los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia". Además el 17.6 complementó tal disposición estableciendo que "las prestaciones en dinero por incapacidad permanente previstas en la ley 24557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE…desde el 1° de enero del año 2010"…".----------

------ La Corte Federal, en el fallo de referencia, estableció su postura en relación a qué siniestros laborales se aplican las normas de la ley 26773; y señaló las razones por las que los precedentes "Lucca de Hoz", "Calderón" (Considerando 7°) y la doctrina del caso "Arcuri Rojas" y "Camusso" (Considerandos 10 y 11) no resultaban de aplicación.----------

------ En la segunda parte del considerando 8º sostuvo: "...La simple lectura de los textos normativos reseñados en el considerando 5° de este pronunciamiento basta para advertir que del juego armónico de los arts. 8° y 17.6 de la ley 26773 claramente se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de: (1) aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que los dejara "actualizados" a esta última fecha; y (2) ordenar, a partir de allí, un reajuste cada seis meses de esos importes de acuerdo con la variación del mismo índice. Y que del art. 17.5 también se desprende claramente que estos nuevos importes "actualizados" solo rigen para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación...".---------- Y finalmente

destacó que: “...En síntesis, la ley 26773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los "importes" a los que aludían los arts.1°, 3° y 4° del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente, a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal. El texto del art. 17.5, al establecer que "...las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero" entrarían en vigencia a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para otra interpretación...”.----------

------ **G.-** Del análisis efectuado surge con evidencia, la postura que adoptó la CSJN respecto a la cuestión que nos ocupa. Sin dudas, se decidió por la inaplicabilidad de la ley 26773 a los accidentes de trabajo que ocurrieron y las enfermedades profesionales que se manifestaron, en tiempo anterior a su entrada en vigencia.------

------ **H.** En mérito hasta lo aquí expuesto, y considerando que en el caso de autos, el actor padeció el accidente de trabajo el 29 de mayo de 2012, no resulta de aplicación la ley 26773 (BO del 26/12/2012), en lo que respecta a la aplicación del RIPTE a la prestación de pago única reconocida en las instancias anteriores (art. 14, ap. 2 inc. a) de LRT).----------
-

------ En definitiva, sin mayores reparos y análisis corresponde confirmar el decisorio apelado porque si bien el criterio sustentado por la Alzada se ha caracterizado por ser el minoritario en esta Provincia es el que se identifica con el fallo de la Corte Federal que resulta de aplicación al caso de autos.----------

------ En consecuencia, propondré al acuerdo rechazar el recurso de casación de fs. 267/286vta.; y en consecuencia, confirmar la sentencia en crisis en lo que fuera materia de agravio. **ASI LO VOTO**.----------

------ Las costas por la intervención ante este Superior Tribunal deberán ser impuestas en el orden causado (art. 69, segundo párrafo del CPCC). Ello así, porque

al tiempo que el actor interpuso el recurso de casación existían posiciones jurisprudenciales divergentes a nivel provincial; este Cuerpo no había sentado criterio al respecto; y menos aún, la Corte Nacional. Es decir, que el recurrente contaba con circunstancias objetivas para considerarse con derecho a recurrir ante esta instancia extraordinaria (Ranea Loutayf, Roberto G. *Condena en costas en el proceso civil*. Ed. Astrea. 1ª reimpresión, ps.78/80).----------

------ Asimismo, en mérito a la extensión, calidad y resultado obtenido corresponde regular los honorarios del Dr. B. E. M., letrado apoderado del actor, en un 25% de los que a su favor se fijaron en la sentencia de primera instancia; sin perjuicio de los mínimos legales y con más el IVA si correspondiera.---------- **A la misma primera cuestión el Dr. Mario Vivas dijo**: ---------- **1.- *Antecedentes*.**----------

------ El Dr. Donnet efectuó un detalle adecuado y preciso de antecedentes de la causa. Razones de celeridad y economía procesal aconsejan que no reitere tales conceptos y remita a su lectura.----------

------ **2.- *Análisis del recurso de casación*.**----------

------ ***Violación de la doctrina legal - Sentencias contradictorias (art. 291, inc.“a”, CPCC)*.**----------

------ ***2.1.*** El recurso interpuesto con fundamento en el inc. “a” del art. 291, CPCC, se ajusta a las exigencias del código adjetivo. Identifica con claridad sentencias de ambas Salas de las Cámaras de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y Trelew que sostienen un criterio contrario al de la decisión que impugna; y satisfacen la exigencia temporal establecida por el rito, esto es, fueron dictadas en un lapso no mayor a tres años.----------

------ De este modo puedo identificar que al tiempo de la interposición del recurso

de casación en las circunscripciones de esta Provincia existían -al menos- dos posiciones contrarias como el actor señaló al fundar la causal casatoria.----------

------ Por un lado, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn que -siguiendo sus propios precedentes- entendió inaplicable la ley 26773 al presente caso, por carecer de operatividad propia y directa a las contingencias anteriores a su entrada en vigencia (BO 26/10/2012)(SDL Nros. 94/2013, entre otras, posición restringida). Y por otro, las Cámaras de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y Trelew que se enrolaron en la aplicación inmediata de la norma a las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad y no liquidadas a la fecha de su entrada en vigencia, conforme a la finalidad protectora de las normas que regulan la seguridad social y por resultar coherente con el propósito legislativo de promover la progresividad de los derechos sociales y los diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (posición amplia).----------
-

------ ***2.2.*** De modo preliminar, quiero dejar sentado que en aquellos casos que intervine como magistrado de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, y aún con anterioridad al dictado del fallo de la CSJN al que hizo referencia mi colega preopinante, ya me había pronunciado en favor de la inaplicabilidad de ley 26773 a contingencias anteriores a su entrada en vigencia (v.gr.: SDL Nros. 94/13; 27/15, 32/15, 83/15, entre otras).----------

------ El eje de mi razonamiento en ese momento para así decidirlo, fue que declarar inconstitucional el art. 17.5 de la ley 26773 consistía lisa y llanamente en la aplicación retroactiva de una ley, en clara contradicción con el art. 3 del Cód. Civil -vigente en ese momento- y del 7 del CCyC, con el pretexto infundado de otorgar prevalencia al principio protectorio que rige en la materia.----------
-

------ Sostuve que el art. 17.6 de esa norma, cuya vigencia resultaba posterior a la traba de la litis, en nada afectaba al actor ni ocasionaba lesión alguna a sus derechos por cuanto no estaba vigente en su oportunidad. Y agregué que en ningún momento

ese inciso refiere ser una excepción del inc. 5 ni realiza salvedad alguna al respecto, y que otra lectura del inc. 6 constituye una pretendida retroactividad implícita.----------

------ ***2.3.*** Por lo dicho, el contenido de mi voto no hará más que ratificar el criterio del que fui partícipe, siguiendo en cuanto a sus fundamentos la posición asumida por este Cuerpo en los antecedentes "Egue" y "Tello", dictados por mis colegas ministros que hicieron propia la doctrina emanada del precedente de la CSJN *"Espósito";* y que luego mantuve como integrante de esta Sala, por ejemplo en las sentencias definitivas Nros. 08/SRE/2017, 09/SRE/2017, 10/SRE/2017, 11/SRE/2017, 12/SRE/2017 y 14/SRE/2017.----------

------ Recuerdo que la CSJN en *"Espósito…"* dejó establecido cuáles fueron las contingencias laborales que quedaron bajo la órbita de la ley 26773 y explicitó los motivos por los cuales los precedentes "Lucca de Hoz", "Calderón" y la doctrina del caso "Arcuri Rojas" y "Camusso" no resultaban de aplicación al caso.----------

------ El Máximo Tribunal dispuso que "…las modificaciones sustanciales que al sistema de reparación integral implementó la ley 26773 tuvo como objetivo introducir mejoras para las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su entrada en vigencia, salvo que la misma norma disponga expresamente lo contrario. Ello, en cuanto así lo estatuye el propio texto del art. 17, inciso 5: "...Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha"…".----------

------ Por ello, y en mérito a las consideraciones señaladas, una vez más sostengo que el art. 17.6 no es una excepción a la regla anterior, y en virtud de ésta, la Ley

N° 26773 solamente es aplicable a siniestros o enfermedades profesionales cuyas primeras manifestaciones hayan sido posteriores a su entrada en vigencia (26/10/2012); extremo que no se da en el sublite.----------

----- En efecto, de la constancias obrantes en autos, surge que el actor padeció el accidente que le produjo la incapacidad, el día 29 de mayo de 2012, por lo que la norma que resulta de aplicación al caso es la ley 24557 vigente al tiempo del siniestro; y no las pautas indemnizatorias establecidas por la posterior ley 26773.

------ En consecuencia, propondré rechazar el recurso de casación de fs. 267/286 vta.; y en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida en lo que fuera objeto de agravio. **ASI LO VOTO**.----------

-

------ Las costas de esta instancia serán impuestas en el orden causado (art. 69, segundo párrafo del CPCC). Ello así, porque el actor al interponer el recurso de casación contaba con elementos jurídicos objetivos -disparidad de criterios que imperaban en la jurisprudencia local y nacional- que lo condujeron de modo razonable a mantener su pretensión por vía recursiva (Ranea Loutayf, Roberto G. *Condena en costas en el proceso civil*. Ed. Astrea. 1ª reimpresión, págs.78/80).----

--

------ Finalmente, por las tareas desarrolladas ante esta sede, calidad, extensión y resultado obtenido, los honorarios del Dr. B. E. M., letrado apoderado del actor se regularán en un 25% de lo fijado por su actividad profesional en la instancia de origen (art. 13, Ley XIII, N° 4); siempre que el importe que resulte no sea inferior al mínimo legal de ocho (8) Jus (art. 13, LH vigente); y con más el IVA si correspondiera.----------

---- **A la segunda cuestión el Dr. Donnet dijo**: ----------

------ Tal como he votado la primera cuestión propongo al acuerdo: 1) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora; y confirmar la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravio. 2) Imponer las costas por la intervención ante este Superior Tribunal en el orden causado (art. 69, 2° párrafo, CPCC). 3) Regular

los honorarios del Dr. B. E. M., en un 25% de lo fijado por su actividad profesional en la instancia de origen (art.13, Ley XIII, N° 4) siempre que el importe que resulte no sea inferior al mínimo legal de ocho (8) Jus (art. 7 de la Ley XIII Nº 4, modificada por Ley XIII Nº 15) y con más el IVA si correspondiera.----------

------ **A la segunda cuestión el Dr. Vivas dijo**: ----------

-

------ Tal como voté a la primera cuestión, concuerdo con la que propiciara el Dr. Donnet.----------

-

------ Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente.----------

---------- **S E N T E N C I A** ----------

------ **1º) RECHAZAR** el recurso de casación interpuesto por la parte actora; y **CONFIRMAR** la sentencia apelada en lo que fuera materia de agravio.----------

------ **2°) IMPONER** las costas por la intervención ante este Superior Tribunal en el orden causado (art. 69, 2° párrafo, CPCC).----------

------ **3°) REGULAR** los honorarios del Dr. B. E. M., letrado apoderado del actor en un 25 % de lo regulado por la actividad profesional en la instancia de origen (art. 13, LH vigente) siempre que el importe que resulte no sea inferior al mínimo legal de ocho (8) Jus (art. 7 de la Ley XIII Nº 4, modificada por Ley XIII Nº 15) y con más el IVA si correspondiera.---------- **4°) REGÍSTRESE,** notifíquese, y oportunamente, devuélvase.----------

Fdo. Dres. Miguel Ángel Donnet y Mario Vivas.

Recibida en Secretaria el 18/12/17.

Registrada bajo el N° 20/SRE/2017.CONSTE

Dra. Claudia Tejada, secretaria